

Prensa Obrera

POR UN PARTIDO OBRERO



Jueves
11 de Marzo
de 2020

Año XXXVII
Nº 1.617

\$50
www.po.org.ar
www.prensaobrera.com
prensaobrera@gmail.com

Bartolomé Mitre 2162
C1039AAB
Ciudad de Buenos Aires

Editorial

Las "razones"
de este
24 de Marzo



MARIANO FERREYRA
LA LUCHA CONTINUA

A 45 AÑOS DEL GOLPE

24 DE MARZO

COMO DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS

A LAS CALLES Y PLAZAS

Desde hace 37 años, todos los 24 de Marzo el pueblo argentino sale masivamente a la calle y marcha a los centros del poder político.

Así expresa su repudio al golpe de Estado genocida de 1976 y rinde homenaje a los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos.

La movilización del 24 de Marzo no es solo una conmemoración. También representa una lucha contra la represión, la impunidad, la entrega y el ajuste que los sucesivos gobiernos constitucionales aplican contra el pueblo trabajador.

La actualidad de la movilización del 24 de Marzo se explica por una cuestión de fondo: la misma clase que dio el golpe de Estado, los mismos empresarios, banqueros, capitanes de la industria y la llamada patria contratista es la que ha gobernado en estos 37 años de gobiernos constitucionales.

Por eso, hoy en la Argentina, la pobreza alcanza el 45% y llega casi al 60% entre nuestras pibas y pibes. Por eso, la mayoría de los jubilados son pobres, con haberes que superan apenas los 20.000 pesos. Por eso,

casi el 40% de los trabajadores está precarizado, privado de todo derecho laboral. Por eso, se agrava la crisis habitacional y ambiental.

Mientras el pueblo sufre todo tipo de privaciones, los gobiernos se subordinan a la banca internacional y al FMI para cumplir con el pago de la deuda externa usuraria, que tuvo su origen en la dictadura militar y que todos los que nos gobernaron renunciaron a revisar y repudiar.

Esta política de ajuste se aplica con represión. Lo sabe el pueblo de Formosa, que sufre al régimen de Insfrán, un pejetista-kirchnerista que fue aliado de Macri bajo su gobierno. Una represión que sufre con mayor fuerza la juventud, azotada por el gatillo fácil que se cobró la vida de Facundo Astudillo Castro o las familias pobres, como sucedió en Guernica.

A pesar de que sobran las razones para movilizar el 24 de Marzo, las organizaciones ligadas al oficialismo anunciaron que este año no concurrirán a Plaza de Mayo. La deserción tiene una lógica: no quieren incomodar al gobierno que aplica un ajuste contra el pueblo.

Ya defecionaron de ser organizadores del 8M cuando arrecian los femicidios, eludiendo la responsabilidad del Estado. Como las centrales obreras abandonan a suerte a las luchas de los trabajadores de la salud, de la docencia, de las fábricas que cierran, para embarcarse en un pacto social que solo garantiza el ajuste.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, integrado por centenares de organizaciones y agrupaciones independientes del gobierno, decidió que mantendrá la movilización como ocurre todos los años.

Llamamos a los trabajadores, a la juventud, al movimiento de mujeres, a toda la población democrática a acompañar masivamente esta movilización a Plaza de Mayo y en todas las provincias y ciudades del país.

Contra la impunidad y represión de ayer y hoy. Basta de ajuste, saqueo y FMI. No al pago de la deuda.

Vacunas para todos, ni privatizadas ni VIP. El Estado y el gobierno son responsables.

Los paros docentes contagian a estatales, salud y judiciales

El conflicto docente continúa, en rechazo a las paritarias a la baja que pretende imponer la burocracia de Ctera; en rechazo a la presencialidad sin condiciones; en defensa de los derechos laborales y de los estatutos, y de las reivindicaciones de la comunidad educativa.

La convergencia completa del gobierno nacional y los provinciales con toda la burocracia sindical docente ha puesto de relieve que la lucha se abre paso gracias a la presión de la base y de los sindicatos y seccionales combativas.

La expresión más acabada de ello acaba de registrarse en la provincia de Santa Fe. Allí, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, a su vez secretaria general de Amsafe, no pudo hacer pasar un acuerdo a la baja con el gobernador Omar Perotti del 35% en tres cómodas cuotas. Alesso fue derrotada ampliamente por la votación a nivel provincial, por los planteos de rechazo de la oposición antiburocrática, que impusieron paros de 48 horas en las próximas dos semanas.

Se trata de un triunfo parcial importante, cuyo alcance dependerá de la disposición de los distritos opositores de Amsafe, particularmente Rosario, de acaudillar un proceso de lucha que supere a la burocracia celeste provincialmente. Así lo consignó el diario *La Capital*: "Triunfó la postura de la delegación Rosario".

El rechazo de la docencia santa-



Willy Monea

fesina a la política de paritarias a la baja ha colocado en la encrucijada a las burocracias de ATE y de Sadop, también del Frente de Todos. Es de enorme contenido, porque se trata de una gran provincia que desafía no solo el miserable conformado inicial nacional, sino todo el porcentaje de la pauta de Guzmán y Fernández para todo el movimiento obrero.

En Neuquén, Aten está en su segunda semana de cinco días de paro, con bloqueo de la sede de gobierno, cortes de ruta y marchas. El ofrecimiento del gobierno del MPN es de 28%, eje del ajuste contra todos los trabajadores de la provincia.

La huelga confluye con los autoconvocados de la salud (que están de paro desde hace una semana), de judiciales y del Sindicato de los Profesionales de la Salud de Neuquén. Por su parte, el burócrata de ATE, Carlos Quintriqueo, está poniendo todos sus esfuerzos en quebrar y dividir la lucha. El planteo del congreso de delegados de base está en el centro de nuestra agitación para unir el movimiento.

En Mendoza, el Sute recuperado paró 48 horas, desafiando al presentismo del ítem aula por primera vez. En el congreso provincial del gremio, la propuesta es continuar con 72 horas de paro la semana

próxima. La agitación crece en todo el Estado.

En Santa Cruz, Adosac volvió a parar 48 horas esta semana y arrastró a judiciales, salud y ATE. En Río Gallegos hay una ocupación del Ministerio de Salud por parte de enfermeros autoconvocados (por fuera de los sindicatos de salud). Adosac volvió a rechazar el ofrecimiento salarial de Alicia Kirchner, lo que escala el conflicto.

Agmer (Entre Ríos) paró los días 11 y 12 de marzo. El gobernador del Frente de Todos, Gustavo Bordet, cerró administrativamente la instancia paritaria unilateralmente, con un 15% de aumento. El conflicto sigue.

El Sutef, Tierra del Fuego, con una dirección relativamente afín al Frente de Todos, ha rechazado la propuesta salarial del gobierno provincial, se declaró en estado de alerta y movilización, y el congreso provincial resuelve si profundiza las medidas de paro tomadas en el inicio del ciclo lectivo.

En la Ciudad y en Buenos Aires, Ademys y los Suteba Multicolores pararon el 8 de marzo con limitado acatamiento, pero hay una lucha a brazo partido en las escuelas por las condiciones de la presencialidad.

En Chaco hubo una movilización multitudinaria y, en una encuesta, el 92% de la docencia rechazó el ofrecimiento del gobernador Jorge Capitanich. En Misiones, la Mesa de Lucha resolvió continuar con 48 horas de paro el 17 y 18 de marzo.

Ctera debe responder a los maestros y no a los gobiernos

Desde Tribuna Docente exigimos paro nacional de Ctera, por un básico nacional de 56 mil pesos indexado por inflación, condiciones de salubridad, infraestructura, higiene y seguridad. Llamamos a los sindicatos y seccionales multicolores y antiburocráticos a una acción común y al frente único de lucha con todos los trabajadores estatales para llevar las luchas a la victoria.

Daniel Sierra

Neuquén es sacudida por fuertes luchas de trabajadores, las cuales rechazan los pactos contra los salarios, el trabajo y el desguace de la ayuda social. Para los trabajadores estatales y docentes, el gobierno fijó un aumento del 12% más sumas fijas en negro y en cuotas. Se trata de propuestas miserables, que perpetúan la rebaja salarial operada en 2020 y no contienen ninguna recomposición salarial frente al proceso inflacionario. La docencia continúa de paro, con actividades en las rutas y bloqueos en Casa de Gobierno. La dirección del sindicato, ligada al Frente de Todos, se ve obligada a impulsar el paro por la gran bronca de la docencia, negándose a la unificación con otros sectores en lucha. En salud se procesa una rebelión de sus trabajadores en rechazo a la entrega que firmó ATE y UPCN. Esta surge desde abajo y se desarrolla con paros, asambleas interhospitalarias y actividades por localidad. Es una huelga formidable de los que están en primera línea contra la pandemia,

y el gobierno busca el desgaste y el fin de la huelga a través de los descuentos.

En tanto, los judiciales están de paro rechazando la propuesta oficial del Tribunal Superior de Justicia del 12%. Aquí, la dirección del sindicato también se niega a la unificación, pero los trabajadores van buscando canales de unidad.

Mientras que las organizaciones piqueteras independientes, como el Polo Obrero, combinan las jornadas nacionales con el impulso de iniciativas provinciales que incluyen a la CTEP, el FOL y el Frente Popular Darío Santillán. La lucha por el trabajo genuino y por un seguro al desocupado enfrenta a un gobierno que tiene los programas sociales congelados en 6.000 pesos

y abastece solo un 25% la demanda en comedores y merenderos. Por ello, las organizaciones desarrollan nuevas acciones sobre las rutas.

Unidad de los trabajadores

Las acciones que desenvuelven los trabajadores/as enfrentan la alianza del gobierno de Omar Gutiérrez y del gobierno nacional. Sucede que Neuquén, así como otras provincias, expresan un laboratorio político. Por un lado, está la gran disposición de lucha de los trabajadores, con autoconvocatorias y paros generales, y por el otro, la capacidad de los gobiernos de contener y doblegar a los que enfrentan el ajuste. Por ello, la llegada de tres ministros nacionales a Neuquén en los próximos días representa un

fuerte espaldarazo de Fernández y Gutiérrez en el medio de un proceso huelguístico.

Para los gobiernos es clave que triunfen estos acuerdos salariales por debajo de la inflación y de la canasta de pobreza. Pretenden que del ajuste a los salarios, jubilaciones, presupuesto de salud y educación salgan los recursos para el repago de la deuda externa y la continuidad de los subsidios a los capitalistas. Además, Gutiérrez y Fernández son conscientes del cuadro de precariedad del despegue de Vaca Muerta debido a la crisis nacional, la fuga de capitales y la huelga de inversiones.

Congreso de delegados de base

En este escenario se impone la ne-

cesidad de un frente único de lucha, un plan de acción unificado, comités de huelga por lugar de trabajo. Junto a ello es clave la iniciativa de impulsar un congreso de delegados de base de los sindicatos en común con los trabajadores desocupados. Esta consigan importa, por un lado, porque se trata de una herramienta de organización de todos los trabajadores en los sindicatos que pactan contra los salarios y, por el otro, es un instrumento destituyente contra la burocracia sindical y de lucha por una nueva dirección en los sindicatos.

La masividad de las movilizaciones y el surgimiento de nuevos luchadores/as ponen en el orden del día la necesidad de un plan de lucha unificado con el objetivo en derrotar el ajuste del régimen del FMI.

El Partido Obrero se juega a fondo por el triunfo de estas importantes luchas populares.

César Parra

Neuquén caliente

Por un congreso de delegados de base para votar un plan de lucha unificado



Las “razones” de este 24 de marzo

EDUARDO SALAS

Cuando faltan pocos días para un nuevo aniversario del golpe genocida de 1976, el pueblo formoseño vivió en carne propia una brutal represión. Fue la manifestación de un régimen, el de Gildo Insfrán, que impuso a balazos y confinamiento arbitrario una cuarentena dominada por el hambre y la pérdida de derechos, mientras la salud se sigue derrumbando.

El agravio continuó con la solidaridad del gobierno de Alberto con el represor y su camarilla, y peor aún, con la inclusión del propio Insfrán en el acto oficial contra la violencia hacia la mujer. Una bofetada a las mujeres en su día, cuando viven un recrudecimiento de la violencia sobre ellas con el dramático aumento de los femicidios.

Para completarla, el pueblo de Formosa tuvo que soportar el desembarco de la derecha, con Patricia Bullrich a la cabeza. Los responsables de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, los padres de la doctrina Chocobar, los que reprimieron las manifestaciones obreras y populares aparecieron agitando ¡contra la represión! Aquí no hay grieta, el gobierno “nacional y popular” tiene sus propios Bullrich a los que defiende a capa y espada: Insfrán es uno de ellos; Berni, el protector del gatillo fácil que asesinó a Facundo Astudillo Castro, otro.

En el medio, la pelea por el control de la Justicia impuso la renuncia de su ministra, Marcela Losardo, por la presión del kirchnerismo. Los jueces deben ir tomando nota del lento pero sostenido copamiento del gobierno por una de las patas de la coalición que gobierna, la misma a la cual tiene imputada en numerosas causas por corrupción.

La preocupación del kirchnerismo no está en la evidente desidia con que los jueces y fiscales actúan ante las denuncias de violencia de género. Por ello renunciaron a movilizar masivamente el pasado 8 de Marzo. Tampoco por la fuerte lentitud en los juicios contra los represores. Ni por la complicidad con la impunidad de la que gozan los curas pedó-



Pablo Bove

filos y abusadores. Mucho menos por la cada vez más fuerte arbitrariedad en los juicios de trabajadores y jubilados y ni qué decir de las denuncias por ataques al ambiente. La preocupación está en garantizar la impunidad de los suyos a como venga ante las múltiples imputaciones por corrupción. Acá también hay coincidencia, y el macrismo en particular busca lo mismo para sus propios imputados.

Otra vez, la deuda

Cuarenta y cinco años después, una de las razones centrales del golpe, abrir el país y su economía a la colonización del capital financiero internacional, sigue siendo la causa número uno del agobio que vive la mayoría del pueblo argentino y del agravamiento del atraso y saqueo del país. Casi 38 años de gobiernos constitucionales, donde se turnaron radicales, peronistas y macristas, agravaron el sometimiento, llevando la pobreza a niveles cada vez mayores. Todos y cada uno de ellos honró la deuda fraudulenta, pagando cientos de miles de millones de dólares y reforzando el endeudamiento usurario a niveles intolerables, deteriorando las condiciones de vida

de los trabajadores, quitando derechos e incentivando su explotación. Décadas de gobiernos ajustadores, que constituyen un régimen común de saqueo, miseria y retroceso.

El gobierno de Alberto Fernández llegó para garantizar este proceso, luego del fracaso de Macri. Por eso festeja que el FMI le haya otorgado 3.300 millones de dólares que le permitirá pagar una cuota de la deuda con el Club de París, contraída en forma directa por la dictadura y revalorizada por Axel Kicillof como ministro de Economía de Cristina. Deuda para pagar deuda.

El gobierno se ilusiona en que esto le permitirá patear un acuerdo con el FMI, que lo obligaría a un ajuste “a fondo” para después de las elecciones. Apuesta con diversos mecanismos a mantener una suerte de “pax cambiaria”, pero el costo es que además de endeudarse a tasas de interés altísimas tiene gran parte de su industria parada por la falta de dólares para comprar insumos -es decir, recesión.

Todo esto no ha evitado el ajuste. Como lo demuestra el aumento de la pobreza, de desocupados. La inflación se está comiendo

los ingresos de los trabajadores. Las tarifas siguen aumentando y el gobierno miente cuando dice que las va a desdolarizar. La salud en el medio de la pandemia es una víctima directa de esta situación. Sin vacunación y testeos masivos a la vista, frente a una nueva ola (como se espera) el gobierno no reservó los fondos para afrontar una cuarentena rígida (sosteniendo a quienes no tienen los recursos para afrontarla) ni para fortalecer el sistema de salud.

Estas son las razones de las acciones de lucha multitudinarias que encaró el Frente de Lucha Piquetero. De las huelgas por salarios de los docentes. De la confluencia de ocupados y desocupados en marchas que sacuden a Neuquén. De las luchas que recorren a fábricas metalúrgicas como Siderar, con un creciente activismo de base. Vamos a fondo en el apoyo, organización y desarrollo de todas las respuestas de lucha frente a los agravios que recibe el pueblo trabajador.

Como siempre: el 24 de Marzo a las calles y plazas

Represión, deuda, ajuste, agravios. Como se ve, entre el 24 de Marzo de hace 45 años y el de ahora hay ligaduras muy profundas. Por eso, a lo largo de 37 años, cada 24 de Marzo fue una acción de lucha por el ayer y por el hoy. Las organizaciones populares ligadas al gobierno, entre ellas las de derechos humanos, han decidido que este 24 no se movilizan cuando las razones para hacerlo sobran.

Nosotros, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estaremos en Plaza de Mayo y en las plazas y calles de todo el país.

Por los 30.000 detenidos-desaparecidos y por los muertos, desaparecidos y encarcelados en “democracia”. Contra la represión que se ensaña con las luchas populares. Contra la miseria, la precarización laboral y la violencia contra la mujer que siguen creciendo. Contra la entrega y el sometimiento: no al pacto con el FMI, por el desconocimiento de la fraudulenta deuda externa.

Por estas y otras muchas razones este 24 a las calles.

Más de 2.000 hectáreas de bosque patagónico fueron consumidas por el fuego en los últimos días en varias localidades de la Comarca Andina de Chubut y en el pueblo rionegrino de El Bolsón. Miles de personas debieron ser evacuadas, con varios heridos y una quincena de desaparecidos. Un centenar de casas fue arrasado por los incendios urbano-forestales. Al momento de escribir estas líneas aún hay focos activos y toda la zona carece de servicio de electricidad y de agua potable.

Este cuadro devastador tiene claras responsabilidades políticas y sociales. Por la simultaneidad de los focos de incendio, los vecinos

Los responsables de los incendios de la Patagonia

afirman que fueron ocasionados intencionalmente. Señalan a los terratenientes y especuladores inmobiliarios que tienen intereses en explotar la zona. También destacan que es frecuente que el fuego se desate por la saturación del tendido eléctrico. Hasta los intendentes debieron reconocer que no tuvieron causas naturales. Pero esta desidia capitalista se combina con el ajuste de los gobiernos.

Alberto Fernández y su ministro Juan Cabandié anunciaron de manera rimbombante el envío de 62 brigadistas a la región afectada, lo máximo que pueden ofrecer en medio del vaciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (cuyo presupuesto fue reducido 43% en términos nominales).

La magnitud del desastre actual revela también la esencia ajustadora del gobierno chubutense de

Mariano Arcioni, que declaró la emergencia ígnea que azota las zonas de El Maitén, Las Golondrinas, El Hoyo, Cholila y Cerro Radal, pero anunció una magra partida de 10 millones de pesos como recursos para abarcar desde el control del fuego hasta la reconstrucción de viviendas y zonas afectadas, y auxiliar a los damnificados. Esto cuando hace tiempo que los brigadistas y bomberos de

la provincia denuncian precarización laboral y atrasos salariales. En los hechos, el gobernador abandona a su suerte a la población de la Comarca Andina.

Deben volcarse todos los recursos necesarios para contener la situación y reparar los daños sociales y ambientales, así como para recomponer el Servicio Nacional de Manejo del Fuego bajo control de sus trabajadores y técnicos. Debe emprenderse, además, una investigación independiente para determinar las responsabilidades concretas en la generación de los focos de incendio.

Iván Hirsch

A 45 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

Marchamos contra la impunidad, el ajuste y la represión de ayer y de hoy

Las organizaciones afines al kirchnerismo y al gobierno no estarán en las calles este 24 de Marzo

Ante un nuevo aniversario del golpe, las organizaciones integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia hemos resuelto convocar a una nueva jornada de lucha por nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, contra la impunidad el ajuste y la represión de ayer y de hoy.

30.000 razones para seguir luchando

Los juicios a los genocidas siguen a cuenta gotas. Desde que se reiniciaron los juicios en 2003 a esta parte, solo un grupo muy reducido de genocidas ha sido condenado. Según el Informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sobre el proceso de juzgamiento iniciado en 2006, en 14 años de juicios, se dictaron 250 condenas con 1.013 personas condenadas y 164 absueltas. Un número irrisorio si contemplamos que hubo medio millar de centros clandestinos en el país. En los hechos se impone una "impunidad biológica", donde es el paso del tiempo y la propia biología la que determina el destino de los exrepresores.

Seguimos exigiendo el juicio y castigo a todos los culpables, como así también la cárcel común y efectiva, basta de domiciliarias.

A 45 años del golpe genocida, más de 300 jóvenes apropiados sigue sin conocer su identidad a pesar de la lucha incansable desplegada para encontrar a todos.

A 45 años del golpe genocida, seguimos exigiendo la apertura completa de los archivos de inteligencia y de la represión. A pesar de los actos oficiales anunciando con bombos y



platillos la apertura de archivos, y de los reclamos de los organismos y militantes e incluso las presentaciones judiciales, éstos siguen guardados bajo siete llaves.

A 45 años, seguimos exigiendo que nos digan dónde están nuestras y nuestros compañeros detenidos-desaparecidos, sus hijos apropiados y que nos digan quiénes fueron los responsables, sin importar jerarquías. ¡Todos fueron genocidas!

Los gobiernos democráticos que se sucedieron desde el '83 a hoy mantuvieron esta política de resguardo a la clase capitalista y a los ideólogos, cómplices y ejecutores de la masacre contra nuestro pueblo. La clase política de la burguesía no rompe lanza con los hacedores del genocidio porque representan sus mismos intereses de barbarie y ex-

plotación de la clase trabajadora.

La cuestión de género también está relegada en el ámbito de los juicios de lesa humanidad. Luego de una enorme batalla desarrollada por las abogadas de Apel, integrantes de Justicia Ya! Se logró que comenzaran a investigarse y condenarse a genocidas por los delitos sexuales cometidos por los campos clandestinos. No obstante ello, el número es irrisorio: solo 31 contemplan de algún modo delitos sexuales, a punto tal que se dictaron condenas por delitos que dañificaron a 112 víctimas. De un total de 968 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, 103 obtuvieron sentencia por delitos de violencia sexual utilizada en modo sistemático dentro de los centros clandestinos de detención. Nuevamente hoy, el pago de la

deuda externa, mecanismo de sometimiento colonial, sigue pesando sobre nuestro pueblo como una condena ruinoso. El acuerdo en marcha con el FMI solo agrava la brutal situación de miseria y hambre que vive la inmensa población en nuestro país.

El ajuste está en marcha: la nueva confiscación a los jubilados, el congelamiento de la IFE, un presupuesto "saraseado" con una indexación que va a estar muy por debajo de la inflación; con un 50% de pobres. También son 30.000 las razones para no pagar la deuda externa y romper con el FMI.

¿Por qué no marchan los organismos vinculados con el kirchnerismo?

Días atrás, los organismos de derechos humanos vinculados con el

kirchnerismo anunciaron que este año no realizarán movilización ni acto. Alegan que se debe a la actual situación pandémica. Ahora bien, con una apertura prácticamente completa de la actividad económica; con la vuelta a clases sin haber vacunado ni a docentes ni a alumnos; claramente son otros los motivos.

A la actual situación de hambre hay que sumarle la escala represiva llevada adelante durante toda la cuarentena. Días atrás, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo que "las fuerzas de seguridad cumplieron un rol fundamental durante la cuarentena". Vale recordar que durante la cuarentena la cantidad de casos de gatillo fácil se incrementó enormemente. A esto hay que sumarle el activo papel que llevaron adelante en decenas de desalojos durante 2020. Seguramente, la expresión más recalcitrante de esta política fue el violento desalojo del predio de Guernica.

Para muestra basta un botón...

La desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro sigue sin ser esclarecida. Va a cumplirse un año sin que haya un solo policía preso o sumariado. El Poder Ejecutivo provincial no tomó medida disciplinaria alguna. Y el propio ministro de Seguridad, Sergio Berni, tuvo hasta el tupé de salir a apretar a la familia de Facundo y a sus abogados. Lo que se dice "un encubrimiento en regla".

No es solo un policía, es toda la institución. La maldita Bonaerense que sigue operando como en las peores épocas. La misma

Bonaerense que secuestró y desapareció a Jorge Julio López ¡dos veces!, la que asesinó a José Luis Cabezas, la misma responsable de la muerte de Luciano Arruga, la que asesinó a nuestros compañeros Kosteki y Santillán en el Puente Pueyrredón. Esa misma, que fue apañada por todos los gobiernos democráticos que sucedieron al golpe, sigue siendo hoy blindada por el propio poder político. De hecho, no nos olvidemos que obtuvieron el mayor aumento salarial del empleo público en la provincia de Buenos Aires.

A copar Plaza de Mayo y las calles y plazas de todo el país

Nosotros no bajamos las banderas. La Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), el Partido Obrero y el Polo Obrero se movilizarán el próximo 24 de Marzo, de Congreso a la Plaza de Mayo

A 45 años del golpe: ¡30.000, PRESENTES!

- Cárcel común a todos los genocidas. Basta de domiciliarias
- Contra la impunidad, el ajuste y la represión de ayer y de hoy
- Apertura de todos los archivos
- Restitución de los hijos apropiados
- Salud y vacunas para todos
- No pago de la deuda. Fuera el FMI
- No al ajuste de los gobiernos
- Libertad a las presas y presos políticos
- Basta de femicidios. El Estado es responsable
- No a la megaminería
- Por el triunfo de todas las luchas obreras y populares

Eduardo Penello y Rayu Alaniz

FORMOSA

Alberto Fernández al rescate de Insfrán

Después del viernes 4 de marzo, cuando la policía reprimió brutalmente al pueblo de Formosa, encarcelando a 104 manifestantes (entre ellos a Fabián Servín, dirigente del Partido Obrero), las movilizaciones han continuado durante toda la semana. El centro de las movilizaciones es el reclamo contra la "fase 1" establecida por el gobernador Insfrán. Esta medida es un virtual estado de sitio, que no tiene nada que ver con una política sanitaria. Mientras aplica la cuarentena a los

palacios, los hospitales de la provincia continúan sin nombramientos de médicos ni enfermeros.

Las movilizaciones reflejan un descontento general. La desocupación estructural existente se agravó con la pandemia. Los paliativos del gobierno nacional (como el IFE) fueron totalmente insuficientes y cesaron en 2021. La crisis de la vivienda se fue agravando con sucesivos desalojos. La población sin vivienda crece. Y todo este cuadro social se produce bajo el gobierno de

¿Cuál fue el objetivo del golpe militar de 1976?



la JP ni el retorno de Perón y su pacto social, ni la represión a mansalva desde el Estado y la burocracia sindical de la Triple A habían logrado cerrar la situación que el Cordobazo abrió. El peronismo había agotado su utilidad para la burguesía en ese momento histórico.

En los meses posteriores se profundizó el giro represivo, con la firma de los decretos que le encargaban a las fuerzas armadas el "aniquilamiento de la subversión interna". La presentación del golpe como una respuesta a la acción de las organizaciones guerrilleras es una fabricación.

Estas habían recibido duros golpes para 1976, que las habían dejado casi desarticuladas.

El lobby empresario prepara el golpe

Desde agosto de 1975, la casi totalidad de la burguesía argentina y el capital extranjero que actuaba en el país se congregó en la Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), que se dedicó a promover el golpe de Estado. Reclamaban "la supresión directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad y dificultan la comercialización, entre otras las leyes de contrato de trabajo, control de precios y horarios de comercio". Ricardo Balbín, jefe de la UCR, tradujo el planteo

como la necesidad de suprimir a la "guerrilla fabril".

El cambio de régimen ("obstáculos legales") tenía por objetivo poder destruir el activismo obrero y las posiciones que habían constituido en comisiones internas, cuerpos de delegados y sindicatos recuperados.

Este cambio de régimen quería imponer a sangre y fuego la desvalorización de la fuerza laboral que el fracaso del Rodrigazo había frustrado. Para imponer este giro, la burguesía empezó acciones de sabotaje económico (inflación y desabastecimiento, la fuga de divisas, huelga impositiva) y una fuerte campaña política con solicitudes y notas periodísticas.

Desde febrero, la Apege lanzó un *lock-out* patronal que tenía por objetivo instalar el gobierno militar y que vio su esfuerzo coronado con el nombramiento de uno de sus principales voceros, José Martínez de Hoz, presidente de Acindar y el Consejo Empresario Argentino, como ministro de Economía.

La guerra sucia contra la clase obrera

La represión ilegal se concentró en toda la generación militante que había surgido en la etapa abierta con el Cordobazo, con especial hincapié en el activismo obrero. Datos citados por la Comisión Provincial de la Memoria bonaerense calculan que un

67% de los desaparecidos eran trabajadores. Los listados de activistas a secuestrar fueron elaborados por las propias patronales. En muchas grandes fábricas, los grupos de tareas actuaron dentro de sus puertas, llegando en la Ford de Pacheco, a establecer un centro de tortura dentro del predio de la empresa.

La eliminación de los convenios colectivos de trabajo, la prohibición del derecho a huelga y la intervención de los sindicatos formaron parte de un ataque general a las condiciones de vida de los trabajadores, que solo en un año de gobierno militar perdieron el 40% de su capacidad adquisitiva.

La burguesía nacional se concentró y se benefició extraordinariamente con los negocios con el Estado en esta etapa. Hubo una multiplicación del endeudamiento feroz, aumentando 7 veces la deuda pública y 3,7 la privada, y coronando el proceso en 1980 la estatización de sus deudas privadas, que pasaron a engrosar el capital de la deuda externa argentina, fuente de crisis económicas permanentes.

Este régimen de ofensiva a la clase obrera no pudo sustentarse exclusivamente en el personal militar. Los partidos patronales colaboraron con funcionarios en todos los niveles, desde cargos subalternos en los ministerios, a los gobiernos provinciales y municipales, donde la UCR aportó 310 intendentes al gobierno militar y el PJ 169. Fuerzas menores y centroizquierdistas, como el PSD (Partido Socialista Democrático) o el PI (Partido Intransigente), también tuvieron cargos.

La dictadura militar no fue un hecho irracional de un grupo de militares engeguceados. Fue una política genocida de la clase dominante argentina, que sigue gobernando al día de hoy, para interrumpir un quiebre histórico de los trabajadores con su dominación.

Guille Kane

La lucha por justicia para Facundo Castro continúa

¡Fuera Berni!

Este 24 de Marzo movilizaremos en el 45° aniversario del último golpe militar genocida, en homenaje a los 30.000 compañeros desaparecidos. No en una acción conmemorativa, sino de lucha contra de la represión y la impunidad que sostienen todos los que gobernaron durante las últimas décadas. El asesinato de Facundo Astudillo Castro es una prueba de ello.

Llegando a los once meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo, los responsables materiales y políticos siguen

libres e impunes. Recién en febrero allanaron la comisaría de Origone, donde Facundo había estado detenido ilegalmente.

El allanamiento dio como resultado restos de piedra de turmalina, compatibles con el collar que llevaba puesto Facundo en todo momento, según reconoció su mamá, Cristina Castro.

Siguen impunes

Alberto Fernández y los gobernadores han reforzado la política de empo-

deramiento de las fuerzas represivas hacia los trabajadores, las mujeres, la juventud en los barrios. Esa represión se les hace necesaria para poder enfrentar la reacción popular frente a los ajustes que golpean sobre las familias obreras como resultado del sometimiento al Fondo Monetario Internacional y a la agravada crisis social y sanitaria.

Este empoderamiento de las fuerzas represivas tiene como referente máximo al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, jefe

de la policía que ha perpetuado el asesinato de decenas de jóvenes en la provincia durante la cuarentena, y a él le cabe la responsabilidad política de la desaparición de Facundo.

Así como la represión a las amigas de Ursula Bahillo frente a la comisaría de Rojas, cuando se movilizaron por su femicidio. Fue quien supervisó personalmente el desalojo en Guernica y en toda la provincia, dejando a miles sin lugar donde vivir, con una brutalidad sin precedentes. La defensa de Berni a la Bonaerense y del

conjunto del poder político al propio Berni es, en realidad, la defensa de la represión y el gatillo fácil como una política de Estado.

Justicia por Facundo y fuera Berni

Hoy queda en el campo independentista de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos salir a luchar exigiendo justicia por Facundo y que se vaya Berni. Contra el manto de impunidad que protege a Berni, la Bonaerense y la represión y persecución de los trabajadores y la juventud como política de Estado.

Camila Mic

El movimiento piquetero asiste a un proceso de organización, desarrollo y acción en pleno ascenso, lo que ha quedado retratado en jornadas masivas como la del 18 de febrero (con 100.000 desocupados en todo el país) y el reciente Plenario Nacional Piquetero del 26 de febrero, que discutió un programa y resolvió un plan de lucha contra el ajuste y la carestía.

Pasando revista al ajuste macrista y la continuidad de las políticas antiobreras bajo el gobierno de Alberto Fernández, el Frente de Lucha Piquetero (FLP) -que nuclea a las organizaciones de desocupados independientes del Estado- formuló su programa, reclamando trabajo genuino, seguro al desocupado igual a la canasta básica, alimentos, tierra y vivienda y políticas de Estado contra los femicidios, entre sus principales reivindicaciones.

La promesa del gobierno de priorizar a los más pobres ha sido incumplida, dejando un saldo de otros 2 millones de nuevos pobres. El gobierno antepone el acuerdo con el FMI a la agenda de reclamos populares. Allí se inscriben los límites y, luego, la eliminación del IFE, la pérdida de empleo, la falta de alimentos e insumos sanitarios, los programas congelados y un salario mínimo que corre detrás de la inflación.

La suba de los alimentos y bienes de consumo masivo golpean principalmente a las familias más pobres, y se suma a la presión de los alquileres (62% de aumento en 2020), servicios y gastos necesarios para vivir.

Las "dificultades" de la contención oficial

El documento aprobado por las organizaciones piqueteras caracte-

Crece la organización y lucha piquetera al calor de la crisis

El Frente de Lucha Piquetero expresa un salto en la conciencia de los desocupados



Willy Monea

riza un proceso de contención de las denominadas "organizaciones sociales" vinculadas con el actual gobierno, que ya bajo el macrismo renegaron de salir a las calles contra el hambre. Ahora, con Fernández, encuentran dificultades para justificar su pasividad, lo que ha dado lugar a algunas acciones parciales y aisladas. El Triunvirato Cayetano

(CTEP, Somos-Barrios de Pie y CCC) se integró directamente al Estado y enfoca su atención en el reconocimiento oficial del gobierno del pseudosindicato Utep.

El FLP, que nunca ha abandonado la calle, ha mostrado un gran desarrollo sobre la base de agrupar a nuevos miles de desocupados y de absorber a compañeros y compañe-

ras que se alejan de las filas de las organizaciones oficialistas ante la falta de iniciativa de estas y las presiones punteriles a las que son sometidos.

Frente único contra el pacto social y el ajuste

El programa votado en el Parque Lezama ya tuvo una primera acción el pasado 4 de marzo, con una contun-

dente jornada nacional en el centro porteño, que se dirigió al Ministerio de Trabajo en reclamo de aumento del salario mínimo (hoy en 21.600 pesos) del cual dependen los programas sociales de 10.800.

Cuando el gobierno blanquea sus intención de convertir a los desocupados y los programas sociales en mano de obra barata para deprimir salarios de convenio, el movimiento piquetero rechaza la superexplotación bajo el mote de la "Economía Popular" y refuerza el frente único de acción para derrotar el ajuste fondomonetarista.

En estos días se está discutiendo una acción con distintas organizaciones por fuera del FLP, que podría convertirse en la más numerosa y contundente bajo el gobierno de Alberto Fernández y que expresa un canal de lucha contra el pacto social del gobierno con la burocracia sindical y organizaciones sociales afines.

El crecimiento del movimiento piquetero independiente se encuentra signado por la crisis social y económica que golpea al país, agravada por las políticas antiobreras del gobierno de Alberto Fernández. Desde el FLP ya han señalado que, de consumarse el acuerdo con el FMI, esto implicará mayores penurias para el pueblo trabajador, con recortes en el presupuesto público -como ya ocurre- y más garantías para el capital financiero en detrimento de los trabajadores.

Estos meses serán decisivos para oponerle al ajuste de Fernández y el FMI el programa resuelto por el Plenario Nacional Piquetero, con despliegue masivo en las calles y una extensión del fantasma piquetero que ya recorre todo el país.

Marcelo Mache

RAMALLO

ArreBeef: una lucha extraordinaria

Se ha desatado una rebelión obrera en el frigorífico ArreBeef, en la localidad Pérez Millán, en el distrito de Ramallo. Desde el viernes 26 de febrero, los 1.000 trabajadores iniciaron una ocupación del frigorífico en reclamo de aumento salarial y exigiendo la renuncia de la comisión directiva del sindicato de la carne de la seccional Ramallo, encabezada por Luis Pérez. Sucede que la patronal de ArreBeef le paga a los trabajadores salarios de 15 mil pesos la quincena, menos de la mitad de lo establecido en el convenio.

Semejante atropello se realiza con la complicidad de la dirección del sindicato seccional, que fragua los informes girados al fisco, haciendo figurar el pago de salarios según lo establecido por convenio, y se reparte con la patronal la importante diferencia

salarial que le roban a los trabajadores. Junto con esto, los trabajadores denuncian un maltrato generalizado de la patronal hacia ellos, y en particular contra los contratados y contra las mujeres, que en muchos casos son víctimas de acosos. La escandalosa confiscación salarial y los atropellos patronales se magnifican si se tiene en cuenta que ArreBeef exporta más del 90% de lo que produce.

La contraofensiva de la patronal, ante la importante reacción obrera, fue declarar un *lock-out*, chantajeando a los trabajadores con el cierre del frigorífico en tanto no cesen con la medida de fuerza. Además de la colaboración brindada por la dirección del sindicato, la patronal cuenta también con el apoyo del Ministerio de Trabajo, que declaró la conciliación obliga-



toria. Frente a esto, sumado a las amenazas de la empresa de iniciar acciones legales, los trabajadores

decidieron salir del predio, pero manteniendo el paro y bloqueando todos los accesos y portones del

frigorífico. Ante la falta de representatividad de la burocracia de Pérez y el rechazo de la patronal de negociar con los representantes electos en asamblea por los trabajadores en lucha, la Federación de la Carne, liderada por José "Beto" Fantini, tomó la posta en la negociación. Por consejo de la Federación, el lunes 8 ingresó a trabajar el sector de cuarteo, dando un gesto a la patronal. Sin embargo, por el momento, no está claro cuál será el nuevo salario de los trabajadores ni si se les pagará lo que se les adeuda por la confiscación perpetrada en los últimos años.

Por su parte, los trabajadores se mantienen firmes en el acampe en la puerta del frigorífico, hasta que arreglen sus salarios y hasta que se vaya Pérez del sindicato.

Corresponsal

La responsabilidad de todo el Estado con los femicidios

En lo que va del año, más de 66 mujeres perdieron la vida a manos de feminicidas. Hombres que esperaban que su pareja o expareja cumpliera con sus planteos, expectativas y preceptos, y que las terminaron matando ante la frustración de no lograr sus objetivos. Todos llevando a su punto más extremo una violencia cotidiana que todos los días el régimen imparte y explota en su favor.

Los feminicidas las tratan de “putas” y las condicionan económicamente. A otras las sumergían en el consumo de determinadas drogas y alcohol para poder mejor dominarlas e incluso violarlas o darles otros tipos de uso. En el caso del policía que se obsesionó con Ursula, y que terminó matándola, tenía denuncias previas, incluso por abuso de menores. El policía que mató a su pareja en Madariaga también tenía una denuncia previa de una expareja. También ahí se sospecha de una relación del policía con la hija de 13 años de la víctima. El que mató en la calle a puñaladas a Guadalupe en Villa La Angostura le mandaba mensajes que decían “Te estoy mirando. Sos mía. No sos de nadie más”.

Cuando una perspectiva como

esta sobre los vínculos personales se generaliza, como es este el caso, corresponde observar de dónde procede esa forma de educación que se expande en todos los poros de la sociedad. La mujer subyugada será más precariamente explotada y con esta modalidad su explotación representa para el régimen social beneficios extra.

Los gobiernos no asisten a las víctimas; por el contrario, las empobrecen más volviéndolas más vulnerables en el contexto de violencia. Las condenan a salarios de hambre, las alejan de la posibilidad de tener viviendas propias y cuando luchan por ellos las reprimen. Tampoco se imparte educación sexual integral porque el gobierno es amigo de la Iglesia, en quien depositó la educación de buena parte de la población con los resultados a la vista. La condición “estructural” de la violencia no se va a cambiar si quienes forman esa estructura siguen alimentándola como hasta ahora.

El Poder Judicial, seleccionado de entre los hombres y mujeres del Derecho que el Estado forma en facultades públicas o privadas, muchas de ellas confesionales y subsidiadas por el Estado, es culpable de la realidad



Juan Díez

que vivimos, tanto como el Ministerio de las Mujeres que no previene casos, ni asiste ni evalúa a los denunciados, o los poderes legislativos, que designan a los jueces o los que crean leyes discriminatorias o buenas leyes que no hacen cumplir.

La violencia adormece, nos coloca en una permanente batalla librada en un pequeño núcleo doméstico, nos consume y este es un aspecto de la violencia de género sumamente valorado por los hacedores del régimen de hambre y ex-

plotación en el que vivimos. Mejor una sociedad consumida, que lúcida para enfrentar los atropellos de los gobiernos de turno.

Para modificar las causas de fondo hay que romper con la Iglesia, quitarle el rol protagónico en la educación oficial, equiparar salarios para todas las mujeres, plan de viviendas con prioridad para las mujeres jefas de hogar, que solo en la Ciudad de Buenos Aires alcanza a casi el 50% de los hogares, contratación de personal profesional

para asistir en planta permanente y con salarios superiores a la canasta básica total. Salario mínimo para las trabajadoras de casas particulares equivalente a la canasta básica. Que el reconocimiento de las tareas de cuidado represente la creación de jardines “maternales” en cada barrio y lugar de trabajo, las licencias especiales, la creación de centros adecuados para adultos mayores, lugares de recreación y deportes. Fuero único (penal y civil) para atender la violencia de género. Elección y revocabilidad de jueces y fiscales. Consejo Autónomo de Mujeres, con gestión independiente y presupuesto estatal.

Rompamos las cadenas de la violencia de género. Trabajemos por eso en una lucha unitaria entre compañeras y compañeros de clase contra el Estado. No más mujeres violentadas ni trabajadores convertidos en feminicidas.

Comencemos a poner en pie la próxima gran jornada de lucha de las mujeres, el próximo 3J que suene fuerte en todo el país el reclamo contra todos los poderes del Estado.

¡¡¡Basta de hambre y feminicidios!!!

Vanina Biasi

■ SALUD

Los intereses capitalistas retrasan el acceso a las vacunas

Luego de meses de idas y vueltas con respecto a la vacuna, finalmente en el mundo tenemos varias aprobadas y listas para su distribución. Eso sí, la misma depende de que los Estados hayan aceptado las condiciones de compra impuestas por los laboratorios, regalando unas cuantas leyes de blindaje jurídico y firmando contratos secretos que permiten que el negociado capitalista con la salud continúe su desarrollo. Lo cierto es que el ritmo de vacunación en el mundo lo determinan los intereses de los monopolios farmacéuticos internacionales.

Argentina tiene acceso a tres de ellas: la vacuna rusa Sputnik V; la Sinopharm, fabricada en China, y la de AstraZeneca/Oxford. Al día de hoy llegaron un total de 3.418.965 dosis, pero solo se aplicaron 1.919.074 -es decir, el 56%. Un ejemplo claro es el de la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof se vanagloria de haber vacunado a 700.000 bonaerenses, aunque lo cierto es que tiene en sus manos casi el doble de dosis; y solo 136.000 recibieron la segunda dosis. Un número similar se ve en el resto del país.



En la Ciudad de Buenos Aires, todavía no se inculó a la totalidad de los profesionales de la salud. Faltarían al menos el 30% de ellos. La privatización del sistema de vacunación mediante la entrega de dosis a las prepagas es otro punto a tener en cuenta, sobre todo cuando esta misma semana se vio que quienes acuden al sistema público terminan totalmente vulnerados, como los adultos mayores que fueron a vacunarse al Luna Park y se encontraron con largas filas de horas, hacinados y sin ningún protocolo mediante.

El escándalo del vacunatorio vip sigue salpicando a ambos lados de

la grieta. No alcanzó con desplazar a Ginés para disipar la niebla. Lo cierto es que lo del exministro de Salud no fue la excepción sino la regla de un sistema de privilegios contra la clase obrera. Carla Vizzotti, salida de las entrañas de Ginés, no cuestiona la pasada gestión, sino que dejó muy en claro que su intención es continuar -y profundizar- la política del gobierno en materia sanitaria.

Aunque quieran hacerlo pasar como un “relanzamiento” del Ministerio, con una nueva ministra, la llegada de más dosis y un “monitor público de vacunación” -que no es más que una página donde se pueden ver

la cantidad de dosis distribuidas y las aplicadas por provincias-, las preparaciones frente a una segunda ola son nulas.

A un año de declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el frágil sistema sanitario argentino continúa sosteniéndose sobre el trabajo precarizado del personal de salud -incluso gratuito, como en el caso de los concurrentes-, y el Presupuesto 2021, con un recorte del 10%, profundiza aquello. El sector privado de las prepagas, con Claudio Belocopitt (Swiss Medical) a la cabeza, ahora reclama un nuevo aumento y dice sentirse “discriminado por el gobierno”, aunque lejos estuvo de eso cuando le otorgaron la reducción de los aportes patronales y el ATP, además de permitir la reducción de las prestaciones y servicios.

La situación puede escalar rápidamente frente a un nuevo brote, por eso acelerar el ritmo de vacunación es necesario y requiere de la instalación de más vacunatorios, contratación de más personal de salud capacitado y todos los recursos implicados en la logística. La centralización del sistema de salud es un eje

fundamental para una planificación que ponga al conjunto de las instalaciones y servicios a disposición de la población.

Que se pongan todos los recursos económicos, humanos, tecnológicos y de infraestructura para lograr una producción a gran escala de la vacuna y de los medicamentos paliativos, declarándolos de utilidad pública, incluso interviniendo laboratorios y farmacéuticas privadas extranjeras y del país, a fin de contar con todos los insumos y tecnología necesarios bajo control de lxs trabajadorxs y usuarios. Para poner en pie un plan de vacunación universal, gratuita, que sea parte del plan anual de vacunación y poder avanzar hacia la inmunidad colectiva.

Por un plan de emergencia de contención de la pandemia, que se organice sobre comisiones populares de control de la misma, visto que la gestión bajo control de los capitalistas es un fracaso. La triplicación del presupuesto en salud y el aumento salarial para el personal de salud, junto con todos sus reclamos.

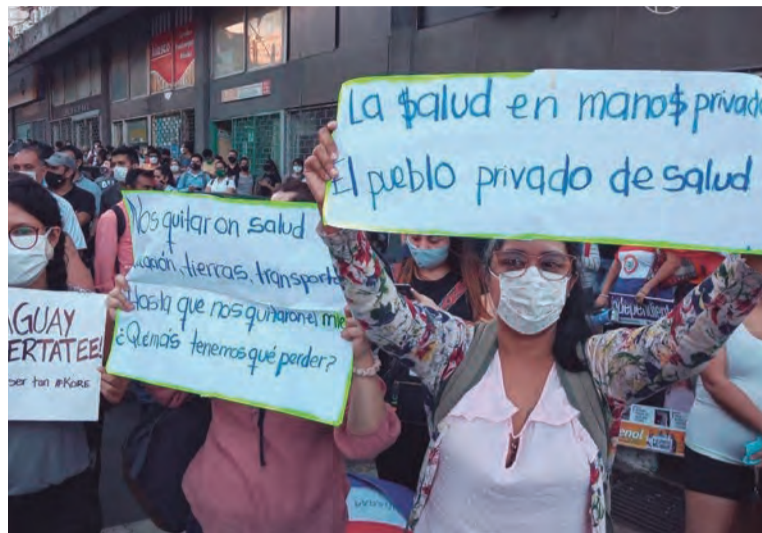
Lucía Cope

Paraguay: una nueva rebelión popular en América Latina

Una rebelión popular se ha desatado en Paraguay contra el gobierno de Mario Abdo Benítez y contra todo el régimen político. Desde el viernes 5 por la tarde se suceden movilizaciones y concentraciones populares en la Plaza de Armas, al frente del Congreso, y en el Mburuvicha Róga, la residencia presidencial, bajo las consignas “Fuera Marito” y “Que se vayan todos”. Las movilizaciones, que se replican en numerosos puntos del país, se sostienen a pesar de la represión, de las detenciones de manifestantes y de la tentativa del gobierno de desactivarlas, echando lastre con el recambio de cuatro ministros. Hacia el domingo 7, las centrales obreras (CUT Auténtica y CUT) se pronunciaron en repudio a la represión del gobierno, reclamaron la renuncia de la titular del Instituto de Previsión Social y en rechazo a un alza en la tarifa del transporte público. La Coordinadora Estudiantil Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción llamó a plegarse a las movilizaciones, reclamando que se detenga la suba de aranceles y se garantice el acceso a la educación pública.

Detonante y trasfondo

El detonante de la rebelión fue el ingreso del sistema sanitario de Paraguay a un cuadro de completo



colapso: sin capacidad para albergar pacientes en unidades de terapia intensiva y sin medicamentos básicos. Este colapso tiene lugar a un año de que el Parlamento paraguayo aprobara la Ley de Emergencia que implicó un plan de ajuste contra el pueblo y que habilitó al gobierno a endeudarse por 1.600 millones de dólares, con el supuesto objetivo de preparar al sistema de salud para enfrentar la pandemia. Poco tiempo después, las centrales sindicales se movilizaban denunciando la corrupción del gobierno en la compra de insumos sanitarios. Esto, sumado a importantes escándalos previos, transformó el rechazo a la corrup-

tela en otra bandera fundamental de la actual rebelión popular. El FMI, un día antes del estallido de la rebelión, intentó alertar al gobierno paraguayo sobre este fenómeno. Y a través de un comunicado, luego de cínicamente felicitarlo “por la respuesta dada ante el Covid”, lo convocaba a “reforzar la gobernanza y la transparencia”.

Junto a estos elementos hay que anotar la gigantesca crisis social que impacta sobre los trabajadores y el pueblo paraguayo. La Ley de Emergencia redundó en despidos y reducciones nominales de salarios. La cuarentena impactó más negativamente aún en el sector de trabajadores que

se encuentran en la informalidad, que asciende al 71% de la población económicamente activa. De ese sector, solo el 17% cuenta con cobertura social. En Paraguay, que cuenta con siete millones de habitantes, hay dos millones de pobres.

Maniobras burguesas y planteo revolucionario

Por su parte, la oposición del Partido Liberal y del centroizquierdista Frente Guasu se subieron al caballo del clamor popular y se pronunciaron en favor de la renuncia del Presidente y del vice. Impulsan la realización de un juicio político, en un claro intento de encauzar el reclamo popular por vías institucionales. El senador del Frente Guasu señaló que, de renunciar el Presidente y el vice, es partidario de que asuma el presidente del Parlamento, también del Partido Colorado, y que se convoque a elecciones anticipadas. Sea como fuese, para que se pueda viabilizar el juicio político son determinantes los votos de los legisladores de Honor Colorado, una fracción del oficialista Partido Colorado, liderada por el ex presidente Horacio Cartes.

En oposición al planteo de un mero recambio institucional, es

necesario continuar la lucha por el “Fuera Marito”, “que se vayan todos” y por una asamblea constituyente libre y soberana, para encarar todas las transformaciones sociales y políticas necesarias para afrontar la crisis y sacar definitivamente a Paraguay de la miseria y el atraso. A través de asambleas populares, congreso de trabajadores y otros, es necesario avanzar por el camino de la huelga general hasta imponer la caída del régimen y un programa de emergencia nacional frente al desastre sanitario.

La rebelión popular paraguaya representa un nuevo llamado de atención para el conjunto de la izquierda del continente. El planteo del Partido Obrero, de concertar una segunda Conferencia latinoamericana y de los EE.UU., se vuelve a revelar como un acierto. En momentos donde se desarrollan y arrecian nuevas rebeliones populares, y donde las fuerzas “nacionales y populares” se postulan para funcionar como la variante de recambio de la burguesía, la izquierda revolucionaria tiene la responsabilidad de colaborar activamente con la superación de la crisis de dirección de los explotados.

Pablo Giachello

BRASIL

¿Luz verde para Lula?

El juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, declaró incompetente al tribunal federal de Curitiba, que supo tener al frente a Sergio Moro, en las causas que se siguen contra Lula por corrupción, y ordenó que las mismas pasen a un fuero del distrito federal, Brasilia, donde un juez deberá decidir si las condenas contra el expresidente son convalidadas o no. La Procuraduría General de la República anticipó que apelará el fallo, lo que puede llevar otra vez la cuestión al máximo tribunal (esta vez, a sus once miembros, o a alguna de sus salas).

Por lo pronto, la decisión del juez Fachin le permite al expresidente presentarse como candidato en las elecciones de 2022. Lula está acusado de recibir “favores” personales -cuando era presidente- por parte de empresas constructoras a cambio de contratos, en el marco del megaproceso conocido como Lava Jato, que involucra a los principales partidos y a la burguesía brasileña en un

esquema de sobrefacturación y sobornos en la obra pública. Todo este proceso judicial, sin embargo, se ha caracterizado por su opacidad y discrecionalidad. Así, sirvió de base para el encarcelamiento y, enseguida, para la proscripción política de Lula, quien no pudo presentarse a los comicios de 2018, en los que fue reemplazado por Fernando Haddad.

El Lava Jato viene sufriendo fuertes reveses. A comienzos de febrero, la unidad judicial dedicada al caso fue disuelta. Y el juez Moro quedó fuertemente cuestionado cuando las investigaciones del sitio *The Intercept* mostraron su parcialidad y el direccionamiento de la causa. El propio Moro, a su vez, dio un portazo en el ministerio de justicia en abril del año pasado, en el medio de una puja con Bolsonaro, al que

acusó de desplazar a un titular de la Policía Federal para bloquear investigaciones en contra de sus hijos.

El fallo de Fachin se produce en un momento crítico de la situación brasileña, debido a una pésima gestión del Covid-19 por parte de Bolsonaro y los gobiernos estaduais, que han llevado al país al colapso sanitario. Además, la pandemia agravó la situación social, con despidos y suspensiones y un crecimiento de la pobreza. Bolsonaro intentó paliar esta situación por medio de una asistencia social de emergencia, completamente limitada.

La economía brasileña sufrió una contracción del 4% en 2020 (la mayor en 25 años) y crecen los cortocircuitos entre Bolsonaro y el “superministro” de economía, Paulo Guedes.

En las condiciones de crisis señaladas, la habilitación de la candidatura de Lula puede formar parte de un preventivo plan B de sectores de la burguesía, que ven al expresidente como una herramienta potencial de contención social. La CUT y el PT, de hecho, han cumplido ese rol a lo largo de todo el mandato de Bolsonaro, evitando a toda costa la puesta en pie de un plan de lucha frente a los feroces ataques contra los trabajadores.

El gobierno de Bolsonaro experimentó su momento más crítico en los comienzos de la pandemia, hace un año, cuando la combinación de la crisis sanitaria, económica y política, pusieron al mandatario al borde de un impeachment. El bolsonarismo, por su parte, echó a rodar la posibilidad de un autogolpe.

De aquella crisis, Bolsonaro salió con un reforzamiento del ala militar, que ganó posiciones, y con un pacto político con el llamado “centrao”, que también fue lubricado con cargos y prebendas a cambio de congelar el juicio político. Es importante tener presente que en el gobierno de Bolsonaro coexisten varios sectores que chocan entre sí: el ala militar, el ultraliberalismo de Guedes, y la camarilla bolsonarista.

La agudeza de la crisis brasileña requiere de un planteo frente a la pandemia (centralización del sistema de salud, triplicación inmediata del presupuesto, comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo) y un plan de lucha de las organizaciones obreras para derrotar el ajuste de Bolsonaro-Guedes. Y al mismo tiempo, se plantea la necesidad de una alternativa política de los trabajadores, que supere la política de colaboración de clases del PT.

Gustavo Montenegro